

Distrito del Estado de Jalisco, que dice: "La justicia de la union no ampara ni protege á José María Hernández, Merced Arias, Cornelio Casas, Quirino Rubio y Felipe Chavarin, contra la ejecución de la pena capital á que los condenó el Director político de Ahualulco, por los delitos de asalto y asesinato cometidos el día 2 de Marzo del año próximo pasado, contra las personas del ciudadano americano John L. Stephens y Jesus Islas, ciudadano mexicano."

Devuélvanse estos autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia, librándose igual copia al Poder Ejecutivo federal por conducto del Ministerio de Relaciones: publíquese, y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo sentenciaron los ciudadanos Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*M. Auza.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*E. Montes.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Junio 2 de 1875.—*Enrique Landa*, secretario.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Jalisco, por Francisco Soto, contra la sentencia de la pena de muerte á que fué condenado por el delito de homicidio.

Pedimento del C. Promotor Fiscal.

C. Juez:

El Promotor fiscal dice: "Francisco Soto, es uno de los reos condenados á la pena

capital, conforme á la ley de 3 de Mayo de 1873, por la autoridad política de Ahualulco, como culpable en los asesinatos del americano Jhon L. Stephens y del mexicano Jesus Islas. Habiendo obtenido del Juzgado se suspendiera la ejecución de la sentencia, como acto reclamado en el presente amparo, se ha remitido el expediente al suscrito para que emita su parecer sobre lo principal.

"Segun el quejoso, se atacan por el C. Gobernador del Estado las garantías que al petente otorga la Constitución: 1º porque se le ha juzgado por la ley especial de 3 de Mayo de 1873, dada por el Congreso de la Union sobre delitos que deben estar sujetos á las leyes de los Estados, con lo que se ha invadido la soberanía de estos; y 2º porque al negársele el indulto por el C. Gobernador contra el dictámen del Consejo de Estado, no ha cumplido con la sujecion al parecer de ese cuerpo, que le impone la frac. 30, art. 16 del decreto núm. 73, y ha infringido, por lo mismo, en perjuicio del solicitante, el art. 14 de la Constitución.

"Honda pena causa al suscrito emitir su parecer en el presente juicio que, como último recurso para salvar su existencia, ha entablado el quejoso, porque ese parecer es contrario al amparo que se solicita de la Justicia federal; pero cumpliendo con el triste deber que por esta vez le impone el art. 9º de la ley de 20 de Enero de 1869, pasa á manifestar los fundamentos en que se apoya.

1º Los plagiaros y salteadores evidentemente gozan y deben gozar de todas las garantías constitucionales que otorga nuestro Pacto fundamental, con excepcion de aquellas que por bien de la sociedad y en su justa defensa, estén suspendidas especialmente contra esos criminales por ley general expedida con autorizacion del mismo Pacto. La Ley de 3 de Mayo de 1873 fué expedida con el objeto y autorizacion indicadas, por el Congreso de la Union, en virtud de la facultad que le concede la frac.

30, art. 72 de la Constitución federal en correlación á lo prevenido por la misma Constitución en su art. 29; y por lo mismo, la aplicación de dicha ley para juzgar á Francisco Soto por el delito de que se le acusó, ha sido legítima en el Estado de Jalisco y del todo conforme á la Constitución que se invoca en su contra.

2º Por lo que toca al segundo punto en que apoya su recurso el peticionario, no constituye un ataque al art. 14 de la Constitución, por las razones que el suscrito tiene ya manifestadas al Juzgado en otro juicio y que repite en el presente.

3º La ley ó decreto del Estado, núm. 73, es reglamentario de la Constitución del mismo Estado, y en la parte que no lo sea, no fué expedido con los requisitos que establece el art. 46 de la repetida Constitución, para que haya podido reformarla.

4º Es evidente que la frac. 30, art. 16 de dicho decreto, es derogatoria de la frac. 14, art. 28 de la Constitución del Estado, porque aquella no establece únicamente requisitos ó formas, sino que en realidad concede al Consejo, que solo es cuerpo consultivo segun el art. 81 de la Constitución citada, lo que esta dá al Gobernador exclusivamente.

5º Ciertamente es que los gobernadores del Estado se habían sujetado al decreto núm. 73 para los indultos y conmutación de penas, y que sin el empate de votos de los miembros del Consejo por el indulto á uno de los asesinos de D. Adolfo Bartholly, todavía hoy se sujetaría á él el ciudadano que actualmente desempeña el poder ejecutivo en el Estado; pero tal precedente no es bastante para derogar la Constitución, ni puede impedir que el C. Gobernador ejerza las facultades que aquella le concede.

6º Por lo mismo, la consulta del Congreso de Abril último, no fué un acuerdo económico derogatorio de la frac. citada del decreto núm. 73, porque esa fracción no ha estado en vigor legalmente, sino por vo-

luntad de la gobernantes que quisieron sujetarse á ella; y si con motivo de la consulta resolutive de Abril próximo pasado, el C. Gobernador ha ejercido sus facultades constitucionales negando el indulto á algunos reos y entre ellos al que solicita el presente amparo, no se puede decir ni menos sostener, que se ataca el art. 14 de la Constitución general.

Concluye, por lo expuesto, el Promotor con fundamento del art. 101 de la Constitución y de la ley de 20 de Enero de 1869, pidiendo que la Justicia de la Unión no ampare ni proteja á Francisco Soto, contra la ejecución de la pena capital que se le ha impuesto.

Guadalajara, Mayo 21 de 1874.—A. Camarena.

Es copia, Guadalajara, Mayo 21 de 1874.—A. Camarena.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Guadalajara, Enero 9 de 1875.

Vistos:—Francisco Soto, sentenciado por la autoridad política de Ahualulco de Mercado, á la pena de ser pasado por las armas con arreglo á la ley de 3 de Mayo de 1873, por los delitos de asalto y asesinato cometidos en las personas de Juan L. Stephens, ministro de un culto protestante, de origen americano, y Jesus Islas mexicano, pidieron amparo y protección de garantías á este juzgado, fundándose en que la citada ley de 3 de Mayo, es restrictiva de la soberanía de los Estados en su régimen interior, atacando por tanto, la frac. 2ª del art. 101 del pacto federativo; además se apoya, en que habiéndosele concedido indulto de la pena capital, por el Consejo de Gobierno del Estado de Jalisco, el C. Gobernador del mismo Estado se lo negó, no conformándose con el parecer del Consejo, fundándose en el acuerdo de la Legislatura de 8 de Abril de 1874; siendo así, que el Gobernador está obligado á sujetar-

se al dictámen del Consejo, según lo dispone la frac. 30 del art. 16 del decreto núm. 73 en los asuntos de conmutación de penas: violándose con esto la garantía que le concede el art. 14 de la Constitución. Visto lo alegado y pedido por el promotor fiscal, y demás constancias que verse debieron; y

Considerando: que la ley de 3 de Mayo de 1873, fué expedida por el Congreso de la Union, conforme á los arts. 29 y 72 de la Constitución de la República; y que la citada ley comprende los delitos de que fué acusado Francisco Soto.

Considerando: que la Constitución del Estado de Jalisco en la frac. 14 del art. 28, dá facultad al Gobernador para conmutar penas; y que la frac. 30 del art. 16 del decreto núm. 73, es contraria á lo dispuesto en el art. 28 de la Constitución del Estado; que por tal razon, el Consejo del mismo en su acuerdo de 8 de Abril, no hizo mas que resolver que el Gobernador debia de usar de la facultad constitucional en los negocios de indulto; y que según esa resolución, el Gobernador de Jalisco al negar el indulto á Soto, obró dentro de la esfera de sus facultades.

Considerando: que en ese procedimiento no se han conculcado en la persona del reo, las garantías constitucionales: esta Juzgado con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, resuelve en definitiva:

1.º la Justicia de la Union no ampara ni protege á Francisco Soto.

2.º Notifíquese esta sentencia á quienes corresponde, publíquese en el periódico Oficial del Estado y remítase este expediente á la Suprema Corte de Justicia para su revision.

El Juez 3.º suplente de Distrito, lo sentenció y firmó—*T. Bonilla.—G. J. Gallegas.*

Es copia. Guadalajara, Enero 19 de 1875.—*G. J. Gallegos.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Mayo 29 de 1875.

Vistos el juicio de amparo entablado por Francisco Soto, condenado á sufrir la pena de muerte por el director político de la Villa de Ahualulco, como uno de los homicidas del C. americano John Stephens y del C. mexicano Jesus Islas, contra el C. Gobernador del Estado de Jalisco: el informe del C. Gobernador: la suspension del acto reclamado: el pedimento del C. Promotor fiscal: las pruebas rendidas por la parte agraviada, su alegato de buena prueba y todas las constancias del proceso;

Considerando: 1.º que el actor funda su derecho, en la violacion de los artículos 101, parte 2.º, por habérsele aplicado la ley de 3 de Mayo de 1873, 14 de la Constitución federal y 16, fracción 30 de la ley local número 73, por haberle negado el ciudadano Gobernador, el indulto contra el dictámen del Consejo de gobierno: 2.º que la ley de 3 de Mayo de 1873, se expidió con arreglo á los arts. 29 y 72 fracción 30 de la Constitución federal; y que no ha sido reclamada por los poderes públicos del Estado de Jalisco, como contraria á la soberanía; sino que antes bien, ha sido cumplida por las autoridades del mismo Estado. 3.º que los Estados de la federacion mexicana deben gobernarse constitucionalmente, según el artículo 41 de la ley fundamental, y que concediendo el art. 28, fracción 14 de la Constitución de Jalisco, la facultad de conmutar penas al C. Gobernador, no ha podido la ley secundaria núm. 73, privarlo de esta facultad, porque «Una Constitución no es nada, si no es la ley de todas las otras leyes.»

Desde que estas pueden sustraerse á su imperio, restringirla, trasgredirla, suspenderla, ya no es mas que una ficcion, una mentira. Entre todas las leyes, solo ella es eficaz, puesto que nada puede contra las otras, que lo pueden todo contra ella. Se diria que no existe, sino para recibir ultrajes, sino para

hacer mas sensibles á cada ciudadano los atentados individuales que le habia ordenado no temer. ¿Qué significa la inmutabilidad que se tiene la osadía de atribuirle? Una ley inmutable, es aquella que se observa, y se comienza á derribar una constitucion desde el momento en que se desobedece á alguna de sus disposiciones literales; y 42 que no se han violado en perjuicio del quejoso, las garantías otorgadas á todos los habitantes de la República por los arts. 101, fraccion 2ª y 14 de la Constitucion federal; en consecuencia, la Suprema Corte de Justicia juzgando definitivamente, decreta: que debe confirmar y confirma la sentencia pronunciada por el tercer suplente del Juzgado de Distrito del Estado de Jalisco en 9 de Enero del presente año, que dice: La Justicia de la Union no ampara ni protege á Francisco Soto.»

Devuélvanse estos autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia, librándose igual copia al Poder Ejecutivo federal por conducto del Ministerio de Relaciones, conforme al decreto de 19 de Febrero del presente año; y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo sentenciaron el Presidente y Magistrados que formaron la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José María Iglesias.*—*M. Auza.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*E. Montes.*—*L. Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

AMPARO.

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Michoacán por el Lic. Bruno Patiño, en representación de la mayor parte de los vecinos de Charo, contra los procedimientos del Jefe Político de Morelia, que ha adjudicado á varias personas, terrenos pertenecientes á la Comunidad de indígenas del mismo Charo

Pedimento del C. Promotor Fiscal

C. Juez de Distrito:

El C. Lic. Bruno Patiño en legítima y acreditada representación de la Comunidad de indígenas del pueblo de Charo, expone á este Juzgado, que en 21 de Agosto del año 1705, compraron sus representantes á los Duques de Terranova y Monte León, las tierras, montes y ojos de agua, situados en el camino que conduce al pueblo de Zitzio distante como tres leguas de Charo, constituyendo á favor de los vendedores una pensión anual de veinte pesos, que cubrieron religiosamente. Que deseando quitar toda clase de limitaciones á este dominio á fin de que fuera perfecto y absoluto, celebraron en 7 de Marzo de 1836, un convenio con el Sr. D. Lucas Alaman, como apoderado del dueño de este censo, y á quien tocó en herencia, quedando desde esa fecha libres los terrenos y montes de tal gravámen, y con facultad los indígenas para disponer libremente de la cosa gravada. Estos hechos quedan comprobados con las respectivas escrituras que se acompañan. Que como en el año de 1827 se dictaron por el Gobierno del Estado las primeras leyes que ordenaron el reparto de los terrenos de indígenas, y el de los de Charo se inició desde entonces conforme al reglamento de 4 de Febrero del año siguiente, se continuó la operación hasta quedar aprobada por el Gobierno en 20 de Mayo de 1861, según se acredita con el acuerdo que en copia se